

**Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez.
PRESENTE.-**

Felipe de Jesús Pineda Espinosa, actuando en mi propio nombre y representación, con domicilio en Calle Costa Rica número 556, Colonia El Retiro de esta Ciudad, autorizo a Alex José Mejía Nulutagua e Itzel Guadalupe López Hernández para recibir notificaciones en mi nombre y designo como mis abogados a los Licenciados en Derecho Rodolfo Andrés Domínguez Constantino y Luis Alberto Sandoval Constantino; y designo el número de celular 9612465258 para recibir cualquier aviso relacionado con el procedimiento, en vía Whatsapp.

Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Convención Americana de los Derechos Humanos, y la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chiapas y sus Municipios, interpongo formalmente RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO por actividad administrativa irregular desplegada por el encargado de la Agencia Municipal de Ribera Cerro Hueco, y el Coordinador de Agencias Municipales; ambos con adscripción a la administración pública que preside.

La actividad irregular que motiva esta reclamación, es de conocimiento público para dicha autoridad -al constituir un HECHO NOTORIO-, constituye un acto lesivo a mis derechos patrimoniales y, por lo tanto, manifiesto bajo protesta de decir verdad los siguientes hechos:

I. La descripción cronológica, clara y sucinta de los hechos y razones en los que se apoya la petición.

Bajo protesta de decir verdad se manifiesta:

1. Fui servidor público del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, desde el 1 de enero de 1996, con el número de empleado 50690 y la categoría de Oficial Especializado "A". Mi última adscripción fue en la Agencia Municipal de Ribera Cerro Hueco, donde me desempeñé conforme a los principios del servicio público, manteniendo una buena relación laboral y ejerciendo mi función con probidad; con un historial intachable.

2. El 1 de marzo de 2023, al presentarme en la Agencia Municipal de Ribera Cerro Hueco, el encargado me informó verbalmente que, por orden del Coordinador General de Agencias Municipales y Subagencias Municipales, se me restringía el acceso a las instalaciones, así también se me impidió registrar mi asistencia y se me prohibió la entrada a mi centro de trabajo.

3. Ante esta situación, interpose los siguientes recursos legales: a) Juicio de amparo indirecto 348/2023 ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, relacionado con el amparo en revisión 566/2023 y el conflicto competencial 314/2022. b) Juicio de amparo indirecto 535/2023 ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, relacionado con el amparo en revisión 371/2023. c) Queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

4. El 12 de julio de 2023, en el juicio de amparo 348/2023, se emitió una sentencia de sobreseimiento al considerar que el acto reclamado pertenecía al ámbito laboral y que las autoridades responsables carecían de dicha calidad. Inconforme con esta decisión, interpose un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, el cual fue admitido a trámite el 10 de agosto de 2023 y registrado bajo el número 566/2023.

5. El 7 de marzo de 2024, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito emitió una sentencia revocando la resolución del Juzgado de Distrito y otorgando el amparo y protección de la justicia federal a mi favor. El Tribunal determinó que las autoridades responsables debían emitir una nueva resolución explicando los motivos de mi baja y notificármela personalmente; habiendo dilucidado que la situación era de la índole administrativa.

El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó la sentencia recurrida por las siguientes razones:

I. Las autoridades que fueron señaladas como responsables sí tenían el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo.

- A pesar de la existencia de un vínculo laboral entre el quejoso y las autoridades responsables, la baja fue decretada de manera unilateral e imperativa, sin el conocimiento del quejoso sobre los motivos.
- Las autoridades responsables no proporcionaron información clara sobre el origen de la baja, lo que generó indefensión para el quejoso.
- La falta de información sobre los motivos de la baja indica que la separación del cargo se realizó de manera extralegal, fuera de cualquier procedimiento o juicio.
- Resolviendo que el asunto se debía resolver en la materia administrativa y no laboral.

II. El juez de distrito erróneamente concluyó que la relación entre las partes era de coordinación y no de supra a subordinación.

- El hecho de que exista un vínculo laboral no significa que la relación entre las partes sea de coordinación.
- Las autoridades responsables actuaron de manera unilateral e imperativa, sin el consenso del quejoso, lo que indica una relación de supra a subordinación.
- La falta de conocimiento del quejoso sobre los motivos de la baja refuerza la idea de una relación de supra a subordinación.

III. El juez de distrito no verificó la existencia del procedimiento previsto para la terminación laboral o administrativa.

- El juez de distrito aceptó como ciertos los argumentos de las autoridades responsables sin verificar su veracidad.
- La información proporcionada por las autoridades responsables era incompleta y oscura.
- El juez de distrito no corroboró la existencia de un procedimiento legal para la baja del quejoso.

En consecuencia, el Tribunal Colegiado revocó la sentencia recurrida y reasumió jurisdicción para estudiar el caso.

Síntesis de los razonamientos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa para conceder el amparo y protección de la justicia federal:

I. Violación al derecho de audiencia (artículo 14 constitucional):

- El quejoso no fue notificado del inicio del procedimiento administrativo que culminó con su baja.
- El quejoso no tuvo la oportunidad de ofrecer pruebas ni alegar en su defensa.
- Las autoridades responsables no motivaron la baja del quejoso ni le informaron de las razones de esta.

II. Aplicación del principio de suplencia de la queja:

- El Tribunal Colegió suplió la deficiencia de los conceptos de violación del quejoso, ya que se advierte una violación evidente de la ley que lo dejó sin defensa.
- Se fundamenta en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo.

III. Concesión del amparo y protección de la justicia federal:

- Debido a la violación del derecho de audiencia del quejoso, se le concede el amparo y protección de la justicia federal.

6. El día 10 de abril de 2024, el C. el encargado de la Agencia Municipal de Ribera Cerro Hueco responsable emitió una resolución en la que se explica y determina mi baja como servidor público, que constituye en si la actividad irregular que se reclama en esta vía; la cual se me notificó legalmente el veintidós de abril de este año.

Misma que se dicta, sin previa audiencia del suscrito, sin que exista acta administrativa previa, así como tampoco se emite por autoridad facultada para ello, y fuera de procedimiento previsto en norma, es decir que no se inició procedimiento administrativo para la remoción o destitución del servicio público que venía desempeñando como servidor público adscrito a la Agencia de Ribera Cerro Hueco; por lo que es fehaciente su ilegalidad.

7. Conocimiento del asunto por parte de las autoridades responsables:

A. Síndica Procuradora:

- Oficio sin número, suscrito el 30 de enero de 2024: La Síndica Procuradora, en contestación demanda en la vía burocrática del quejoso, demuestra pleno conocimiento de la actuación ilegal que derivó en su baja como servidor público.
 - Admite tener conocimiento de la actuación ilegal.
 - Niega que al quejoso le asista el derecho de demandar.
 - Argumenta que el quejoso no fue despedido, sino que se dio de baja por la inexistencia de un nexo laboral; ya trabajo con normalidad hasta el 28 de febrero, pero que el 01 de marzo de 2023 fue dado de baja -sin justificar como se dio dicha baja-.
 - Afirma que el encargado de agencia responsable había sido comisionado a diversa agencia ese día 01 de marzo de 2023;

por lo que no pudo haber sido el quien comunicó al quejoso la actuación ilegal.

- Lo anterior, evidencia que la síndica procuradora da contestación a la demanda en cuestión, conocedora de que no existía resolución emanada de procedimiento contemplado en norma válida y vigente, emitida por autoridad responsable para ello; y, por sus manifestaciones claramente sesgadas, es fehaciente que encubre la actividad administrativa irregular.

B. Coordinador de Agencias Responsables:

- Oficio PM/CGAySAM/002/2023 de 13 de marzo de 2023: El Coordinador de Agencias, en su informe a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, también confirma su conocimiento de la situación:
 - Corroborar la fecha de baja del quejoso.
 - Niega que el quejoso se presentara a trabajar los días posteriores a la baja.
 - Envía copia del oficio al Presidente Municipal para su conocimiento.

C. Presidente Municipal:

- Se presume su conocimiento por la copia del oficio del Coordinador de Agencias.
- No ha realizado ninguna acción para resolver la situación.

8. La baja irregular sustentada en resolución del 10 de abril de este año, emitida por el Agente Municipal de Ribera Cerro Hueco, constituye una actividad administrativa irregular y ha generado los daños que a continuación se exponen:

A) **Vulneración de mis derechos de audiencia, seguridad jurídica y certeza jurídica:** La baja se emitió sin un procedimiento administrativo previo en el que se me notificara y se me permitiera defenderme. Desconozco el número de expediente y no se me ha emplazado, lo que sugiere que la decisión fue unilateral y arbitraria. Esta falta de garantías procesales me ha impedido conocer los motivos

reales de mi despido y defenderme adecuadamente, dejándome en un estado de indefensión.

B) Incongruencia e incertidumbre en la resolución: La resolución es incongruente al invocar indistintamente actos de insubordinación y abandono de empleo como causales de baja, sin precisar los hechos concretos que las sustentan. Esta falta de claridad me ha generado estrés, ansiedad e incertidumbre durante todo este tiempo, impidiéndome ejercer mis derechos laborales y reclamar mis prestaciones en tiempo y forma, al haber sido abrupta e injustificadamente removidas al suscrito.

C) Discriminación y afectación a mi derecho a la jubilación: La resolución me ha privado de mi derecho a la jubilación, a la cual estaba próximo a acceder tras 26 años de servicio público. Considero que esta decisión es discriminatoria y atenta contra mi dignidad, autoestima y reputación, causándome un profundo daño moral y poniendo en riesgo mi estabilidad económica al privarme de mi salario y pensión.

D) Contradicciones e incoherencias en las declaraciones de las autoridades: Las declaraciones de la Síndica Procuradora, el Encargado de la Agencia y el Coordinador de Agencias y Subagencias presentan contradicciones e incoherencias que generan dudas sobre los hechos y la legalidad de mi baja. Estas inconsistencias evidencian irregularidades en el procedimiento y refuerzan la presunción de discriminación y arbitrariedad en mi contra.

E) Incompetencia de la autoridad y falta de procedimiento administrativo: La resolución fue emitida por el encargado de Agencia Municipal, quien carece de facultades para imponer sanciones y dar de baja a servidores públicos. Esta actuación extralegal e irregular viola el principio de legalidad y me ha causado daños tanto morales como patrimoniales, al privarme de mi salario, mi derecho a la jubilación y afectar mi reputación.

F) Daño patrimonial y moral: La falta de un procedimiento administrativo adecuado y la emisión de una resolución ilegal me han privado de mi salario y de mi derecho a la jubilación, generándome un daño patrimonial significativo. Además, la discriminación y las acusaciones infundadas han afectado mi honor, reputación e imagen, causándome un profundo daño moral.

En resumen, la resolución del 10 de abril de 2024 ha vulnerado mis derechos fundamentales, me ha discriminado y me ha causado daños tanto morales como

patrimoniales. Por lo tanto, solicito que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado y se me indemnice por los daños sufridos.

La resolución de baja no fue dictada conforme a derecho, ya que es claro que no se siguió el procedimiento administrativo respectivo, ya que el artículo 44 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas establece que, para dar de baja a un servidor público con nombramiento, como es el caso del suscrito, es necesario iniciar un procedimiento administrativo, situación que vulnera los derechos del suscrito como servidor público adscrito, como por ejemplo que las resoluciones sean dictadas por autoridad competente, debidamente fundadas y motivadas, y que me permitan ejercer mi derecho de defensa.

II. La petición que se formula, agregando un cálculo estimado del daño generado.

PRIMERO.- Se declare la responsabilidad patrimonial del Estado por los actos arbitrarios e ilegales del Agente Municipal de Ribera Cerro Hueco, que me han causado daños morales y patrimoniales.

SEGUNDO.- Se determine la reparación integral del daño al suscrito, que incluye:

A) Indemnización por daño moral: Se solicita una indemnización por la cantidad de \$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), por el sufrimiento, angustia, incertidumbre y afectación a mi honor, reputación e imagen causados por la resolución de baja ilegal y discriminatoria.

Se fundamenta esta reclamación en la presunción de dicho daño, derivada de los hechos acontecidos y del contenido de la resolución del 10 de abril.

En este sentido, la resolución de baja, al señalar conductas como la insubordinación y el abandono de empleo, ha generado un perjuicio a la imagen pública y reputación del suscrito, lo que se conoce como "expolio social". Este expolio social implica que, ante la sociedad, el suscrito fue removido de su cargo por actuar de manera irregular, lo cual afecta su honor, dignidad y autoestima, generando un daño moral presumible.

Además, se puede destacar que la incertidumbre y la falta de claridad en los motivos de mi baja, así como la pérdida de su empleo y la imposibilidad de acceder a su jubilación, son factores que contribuyen a generar un daño moral presumible.

B) Indemnización por daño patrimonial: Se solicita el pago de los salarios dejados de percibir desde marzo de 2023 hasta la fecha, calculados con base en mi último salario mensual de \$19,205.40 (Diecinueve mil doscientos cinco pesos 40/100 Moneda nacional), más las prestaciones correspondientes, incluyendo aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y vales de despensa. Así también se solicita el pago del día del burócrata que debí recibir este año por la cantidad de \$3,280.00 (Tres mil doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), y el aguinaldo correspondiente al año 2023 por la cantidad de \$37,855.38 (Treinta y siete mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 38/100 moneda nacional). Lo que equivale a un total aproximado de \$322,610.98 (Trescientos veintidós mil seiscientos diez pesos 98/100 moneda nacional) por concepto de salarios y prestaciones caídas.

C) Indemnización por pérdida de la jubilación: Se solicita una indemnización por la cantidad de \$1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 moneda nacional), por la pérdida de mi derecho a la jubilación, considerando mi edad, años de servicio y el monto estimado de la pensión que habría recibido.

D) Indemnización por gastos y costas: Se solicita el reembolso de los gastos y costas erogados en la defensa de mis derechos, incluyendo gastos por asesoría legal por la cantidad de \$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 moneda nacional), así como gastos de juicios por la cantidad de \$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 moneda nacional), habiendo hecho el pago de los honorarios del despacho jurídico por la promoción y tramitación del juicio de amparo 348/2023 por la cantidad de \$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), y por la promoción y tramitación del recurso de revisión 566/2023, relacionado con el juicio de amparo mencionado, por la cantidad de \$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional). Así también se pacta una cuota litis del 30% sobre el monto total de la indemnización que se obtenga en la presente reclamación patrimonial.

TERCERO.- Se ordene la reinstalación inmediata en mi puesto de trabajo en la Agencia Municipal de Ribera Cerro Hueco, con el reconocimiento de mi antigüedad y derechos laborales.

CUARTO.- Se ordene al Agente Municipal de Ribera Cerro Hueco que se abstenga de realizar cualquier acto que vulnere mis derechos laborales y se le aperciba de las consecuencias legales en caso de incumplimiento.

III. La relación de causalidad entre el daño producido y la Actividad Administrativa Irregular.

Existe una relación de causalidad directa entre los daños que he sufrido y la actividad administrativa irregular del Agente Municipal de Ribera Cerro Hueco. La resolución de baja emitida el 10 de abril de 2024, carente de fundamento legal y emitida por una autoridad incompetente, sustenta la causa directa de los daños morales y patrimoniales que he padecido derivado de una baja irregular.

La falta de procedimiento administrativo, la violación de mis derechos de audiencia y defensa, así como las contradicciones e incoherencias en las declaraciones de las autoridades responsables, evidencian una actuación arbitraria y negligente que ha resultado en mi despido injustificado y en la pérdida de mis ingresos y prestaciones.

La resolución baja, al ser el acto administrativo que materializa mi separación del servicio público, constituye el origen y la causa determinante de los daños que he sufrido. Sin dicha resolución, no habría existido sustento para la privación de mis derechos laborales, ni la afectación a mi honor, reputación e imagen.

Por lo tanto, la relación de causalidad entre el daño y la actividad administrativa irregular es clara, directa e innegable. La actuación de los servidores públicos referidos, con adscripción a la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, ha sido la causa eficiente y necesaria de los perjuicios que he sufrido, tanto en el ámbito moral como patrimonial.

PRUEBAS

I. Documental Pública: Copia certificada del escrito presentado el 12 de abril de 2024, ante el Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, dentro del juicio de amparo 348/2023, suscrito por el Licenciado Roger Molina Álvarez, en su calidad de delegado de la Agencia Municipal de Ribera Cerro Hueco y Coordinación General de Agencias y Subagencias del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Dicho escrito adjunta el oficio número PM/CJM/0781/2024, de 11 de abril de 2024, que contiene la resolución del 10 de

abril de 2024. Esta prueba se obtuvo del expediente electrónico del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y se considera copia certificada conforme a la Ley de Amparo. Se relaciona con todos los hechos de esta demanda y las prestaciones reclamadas.

II. Documental Privada: Copia certificada del escrito presentado el 14 de abril de 2023, dentro del Juicio de Amparo 348/2023 del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, suscrito por el C. Rodolfo Álvarez García, Coordinador de Agencias y Subagencias Municipales, mediante el cual rinde su informe justificado. Esta prueba se obtuvo del expediente electrónico del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y se considera copia certificada conforme a la Ley de Amparo. Se relaciona con todos los hechos de esta demanda y las prestaciones reclamadas.

III. Documental Privada: Copia certificada del escrito presentado el 3 de abril de 2024, dentro del Juicio de Amparo 348/2023 del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, suscrito por el LAE. Luis Antonio Orantes Zúñiga, en su calidad de Agente Municipal de Ribera Cerro Hueco, de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Este escrito busca dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en dicho juicio de amparo y contiene el oficio sin número firmado por la Síndica Procuradora responsable, en respuesta a la demanda, así como el oficio firmado por el Coordinador de Agencias responsable, que proporciona información incoherente a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y del cual envía copia al Presidente Municipal responsable. Esta prueba se obtuvo del expediente electrónico del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y se considera copia certificada conforme a la Ley de Amparo. Se relaciona con todos los hechos de esta demanda y las prestaciones reclamadas.

. Presuncional, tanto legal como humana: Se invoca en todo lo que beneficie a mis intereses, en relación con todos los hechos de esta demanda y las prestaciones reclamadas.

V. Instrumental de actuaciones: Se presenta en todo lo que beneficie a mis intereses, en relación con todos los puntos que fundamentan esta reclamación.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, ATENTA Y RESPETUOSAMENTE SOLICITO:

PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos de este escrito.

Director: Rodolfo Andrés Domínguez Constantino.
Calle Costa Rica #556, Colonia El Retiro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Cel.- 961 246 5258
E-Mail: tu.solucion.legal01@gmail.com



SEGUNDO.- Acordar lo solicitado por estar ajustado a Derecho y, en consecuencia, proceder a la indemnización solicitada.

PROTESTO LO NECESARIO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 24 de mayo de 2024.

Felipe de Jesús Pineda Espinosa

Director: Rodolfo Andrés Domínguez Constantino.
Calle Costa Rica #556, Colonia El Retiro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Cel.- 961 246 5258
E-Mail: tu.solucion.legal01@gmail.com